

normas comunes a todo tipo de fieles, le serán aplicables también otras normas.

De ahí que la condición de laico no es expresión del principio de diversidad. Si el laico posee un estatuto jurídico en la Iglesia es por estar bautizado, pero bautizados son también los clérigos y los religiosos. De ahí que a todos haya que aplicar el mismo estatuto básico, pues todos poseen la misma condición constitucional. La diversidad es algo que presupone la condición de bautizado —no se puede ser sacerdote sin estar previamente bautizado— y se añade a ella, pero no anula ni sustituye el estatuto básico común. Así pues, al laico no le corresponde otro estatuto básico que el común. A los clérigos, por serlo, les corresponderá otra posición jurídica, pero que poseen **además** —repite— de la posición jurídica común a todos los fieles no en sustitución de ésta.

La aplicación del principio de igualdad no consiste, por tanto, en acortar diferencias entre clérigos y laicos, sino en crear una normativa para lo que tienen de común —el ser fieles— y una normativa especial —que se añade a la común— para los que además de ser fieles ocupan una especial posición jurídica dentro de la Iglesia.

Se sigue de aquí que la condición de laico no es consecuencia de ocupar una especial posición jurídica dentro de la Iglesia, sino precisamente de lo contrario: de no ocuparla. El laicado no es, pues, una manifestación del principio de diversidad, a diferencia de lo que sucede con la condición de clérigo y con la condición de religioso.

Hay, sin embargo, una nota propia del laicado que puede inducir a pensar —tal sucede en el libro que estamos comentando— que en el laico se da un principio de diversidad: me refiero a la nota de secularidad, de dedicación a asuntos temporales.

El Concilio Vaticano II insiste —y con razón— en que la dedicación, a tareas temporales es propia del laicado. En efecto, así sucede, pero como gran parte de la doctrina moderna ha señalado —y particularmente Mercedes Gómez Carrasco (*La condición del laico en el Concilio Vaticano II*, Pamplona, 1972)— la secularidad de que habla el Vaticano II, no es una nota conceptual del laico, sino una nota de **tipicidad**. Es decir, que es típico del laico dedicarse a tareas seculares, pero no que se adquiere la condición de laico por dedicarse a tareas seculares. De otro modo tendríamos que concluir que los sacristanes son clérigos, mientras que el Cardenal Richelieu y el Cardenal Mazzarino eran laicos.

Efectivamente, del hecho de que alguien se dedique a tareas temporales podemos deducir cuál es su posición jurídica ante el Estado, pero no podemos deducir cuál es su posición jurídica dentro de la Iglesia. Para regular la posición jurídica de los fieles dentro de la Iglesia, sólo cabe tomar en consideración el tipo

de actividades eclesiales que están llamados a realizar. Cosa distinta —y muy puesta en razón— es que quienes forman parte de la jerarquía eclesiástica no deben intervenir en la vida política de los Estados —a no ser para emitir un juicio **moral**, no político—, porque ello supondría una indebida ingerencia de la organización eclesiástica en la estatal.

Cuando se entiende que la dedicación a las tareas temporales es una nota conceptual del laico —en vez de una nota típica— se cae en la concepción estamental propia de la **christianitas medieval**, consistente en entender que lo propio de los laicos no es desarrollar tareas eclesiales, sino temporales, con la consiguiente marginación de los laicos en toda participación activa en la vida de la Iglesia. De ahí que los autores medievales denominen **poder laical** a lo que hoy denominamos **poder estatal**.

Es al Estado —no al laico— a quien corresponde la dedicación a tareas temporales como nota conceptual. Es el Estado el que no puede —a no ser disvirtuando su naturaleza— desarrollar tareas eclesiales.

Las diferentes misiones de la Iglesia y del Estado no pueden identificarse a las diferentes misiones de clérigos y laicos. Lo temporal es misión propia del Estado, pero no propia del laico, sino sólo típica del laico.

A lo largo de este comentario, más que exponer las ideas del autor, hemos expuesto la propia opinión contrastándola con las ideas desarrolladas en el libro. Podría de ahí sacarse la falsa impresión de que emitimos sobre el estudio que comentamos un juicio negativo. Nada más alejado de nuestro propósito. Independientemente de que no esté de acuerdo con todas las ideas expuestas, es de justicia reconocer que se trata de un trabajo realizado con gran altura científica, que constituye una aportación de primer orden al tema estudiado. Por lo que a mí personalmente se refiere reconozco, sin ambages, que he aprendido con su lectura cosas que antes ignoraba, y que aprecio particularmente la distinción entre súbdito y persona expuesta por el autor.

JOSE M. GONZALEZ DEL VALLE

## LEGISLACION POSTCONCILIAR

FLORENTIO ROMITA, *Normae exsequutivae Concilii Oecumenici Vaticani II. Supplementum I (1969-1972). Textus officialis titulis, postillis ac numeratione continua instructus, XVI Indicibus (formalibus externis, rerum, citationum) locupletatus*, 1 vol. de 390 págs., Ed. d'Auria, Nápoles, 1973.

Bien puede hacerse una idea de la nueva publicación de F. Romita quien conozca sus publicaciones anteriores sobre **Decreta Constitutiones, Declarationes Concilii Oecumenici Vaticani II y Normae exsequutivae Concilii Oecumenici Vaticani II (1963-1969)**. Este volumen, semejante a los anteriores en su presentación y textura formal, utiliza materialmente criterios análogos a los de su publicación precedente porque, en rigor, viene a ser una continuación de la tarea iniciada con la publicación de las «Normae exsequutivae» del II Concilio Vaticano; con razón califica el autor al presente volumen de **Supplementum I (1969-1972)**, que incluso recibe de su publicación precedente el orden de paginación. Nada que comentar, por tanto, de una publicación cuyo sentido, finalidad y utilidad bien se conocen; el autor, por su parte, señala con suficiente claridad los nuevos criterios de edición que incorpora la obra («Introducción», pp. 565-568). No queda sino felicitarle y felicitarlos por esta nueva aportación en la edición de fuentes, que facilitará en gran medida el trabajo de investigadores y estudiosos.

CARLOS LARRAINZAR

## CONFERENCIAS EPISCOPALES

FULVIO UCCELLA, **Le Conferenze episcopali in diritto canonico**, 1 vol. de 240 págs., ed. Jovene, Nápoles, 1973.

**Extracto del índice:** Introducción: La triple noción de Colegio episcopal. 1. El «affectus collegialis» en Derecho Canónico. 2. Noción y estructura de la Conferencia episcopal. 3. Naturaleza jurídica. 4. Eficacia jurídica de las decisiones adoptadas por la Conferencia episcopal. 5. El reconocimiento, por parte de la Santa Sede, de su actividad. Apéndice. Bibliografía. Índices.

**Fuentes:** A este respecto puede afirmarse que el autor ha manejado, como **fuentes directas** de su trabajo, los textos conciliares sobre el particular (incluidos los relativos al proceso de elaboración de los mismos) y la legislación postconciliar de carácter universal. En este sentido, la documentación del trabajo es completa. Todo ello resulta completado por el uso de una serie de estatutos, relativos a distintas Conferencias episcopales. Este material (reproducido en el apéndice final) constituye la fuente más importante para la elaboración del capítulo segundo.

Como **fuentes literarias**, el autor maneja prácticamente la totalidad de las aportaciones doctrinales. Su referencia bibliográfica, en consecuencia, se puede considerar, sin duda alguna, como exhaustiva.

**Contenido y valoración crítica:** La lectura del índice nos dispensa de indicar el contenido concreto de

esta monografía. El autor se sitúa, en mi opinión, en la línea habitual de la doctrina cuando se enfrenta con el tema de las Conferencias episcopales, a saber: ponerlas en conexión, de una u otra manera, con la colegialidad episcopal. Dentro de esta perspectiva genérica, creo que la aportación del autor estriba en haber sabido ofrecer al lector una síntesis perfecta de la múltiple y compleja bibliografía existente, sobre todo referida a la colegialidad episcopal. La labor de clasificación y ordenación de las distintas cuestiones constituye un mérito, no pequeño, de la monografía.

Sin embargo, este enfoque me parece, hasta cierto punto, limitado. Es decir, si la colegialidad episcopal se manifiesta en las Conferencias episcopales, ¿cómo explicar determinados datos de la legislación vigente sobre el particular? ¿Por qué el propio Concilio (CD, n. 38) no considera como miembros de la Conferencia Episcopal a todos los Obispos de la nación? ¿Por qué insiste en los Ordinarios del lugar y obispos que desempeñan un oficio? ¿No se estará pensando, más que en la colegialidad de los obispos en la colegialidad de las propias iglesias particulares? Estos interrogantes me parecen fundamentales a la hora de concebir las Conferencias episcopales. Su respuesta puede determinar posiciones, hasta cierto punto, dispares en relación, por ejemplo, con la naturaleza, la composición individual, etc. En mi opinión, no pueden olvidarse estos datos legales ni tampoco que la perspectiva organizativa condiciona, en cierta medida, el método a seguir en el estudio de las Conferencias episcopales. Probablemente el autor excluyó explícitamente —posición válida metodológicamente— esta dimensión o consideración.

El tratamiento de la problemática referente a la eficacia jurídica de las decisiones de la Conferencia episcopal —capítulo cuarto— aparece sugerente en los aspectos concretos, objeto del mismo. Sin embargo, las seis páginas que le dedica me parecen insuficientes, tanto en relación con el tema como en el marco de la propia monografía. En efecto, además de los actos que pueda emanar con eficacia jurídica vinculante en el ámbito de cada una de las Iglesias particulares, la Conferencia episcopal realiza otra serie de actividades de muy diversa índole —incluso declaraciones doctrinales—, especialmente significativas en la actualidad. ¿Cuál es el valor que se ha de otorgar a este tipo de actuaciones? La respuesta, en mi opinión, hubiese completado y enriquecido notablemente la monografía. La problemática me parece de vital interés, dado el riesgo existente de provocar una especie de obscurecimiento o anulación del significado y funciones del Obispo diocesano, como consecuencia de un mal entendimiento de la función y valor de las actuaciones de la Conferencia episcopal.

Igualmente me parecen insuficientes las siete páginas que dedica al tema de la «recognitio» de la actividad de la Conferencia episcopal, por parte de la Santa Sede. La problemática, en mi opinión, es bas-